



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

proceso	Ejecutivo singular
demandante	Glanderson Asprilla Rentería
demandado	Otoniel Fernando Vásquez Caro
radicado	05001 31 03 012 2022 00332 01
decisión	confirma auto apelado

Medellín, cinco de junio de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 3 de febrero de 2023 el Juzgado 012 Civil del Circuito de Medellín, decretó la terminación del proceso ejecutivo Rad. 2022 00332 01 por desistimiento tácito y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. Como fundamento de la decisión, el despacho tuvo en consideración que en auto de 28 de noviembre de 2022 requirió a la parte ejecutante para que en un término no superior a 30 días impulsara el procedimiento, en cuanto a efectuar nuevamente las diligencias tendientes a la notificación personal de Otoniel Fernando Vásquez Caro, so pena de que se declare el desistimiento tácito del proceso, por cuanto, en la notificación enviada no se informó de manera correcta, la fecha desde la cual se le consideraría notificado y la fecha desde la cual comenzaría a correr el traslado de la demanda; como tampoco lo previno sobre el término con el que contaba para pagar la obligación o proponer excepciones. En el término otorgado, la parte interesada guardó silencio, es decir, no cumplió con la carga que le correspondía, por lo cual, el juzgado concluyó que procedía la aplicación del artículo 317 del C.G.P.

1.2. Inconforme con esa decisión, el apoderado judicial del extremo procesal activo presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con el objetivo de que el despacho reconsiderara lo resuelto y continuara con el trámite del

proceso. Expuso que en ningún momento desobedeció el auto de 28 de noviembre de 2022 debido a que, dicho auto se cumplió conforme con el artículo 8 de la ley 2213 de 2022, prueba de ello era: a) el formato de notificación, cotejada, enviada al correo electrónico; b) el certificado de entrega al servidor del correo del demandado, lo cual fue leído y cotejado y, c) la demanda, anexos y autos cotejados por la empresa de correo certificado, toda vez que con la certificación el demandado leyó el contenido. Debido a lo anterior, la parte ejecutada se contactó con el demandante el 14 de diciembre de 2022 y solicitó llegar a un arreglo.

Ahora bien, según el apoderado del demandante, el juez no podía decretar el desistimiento tácito, porque estaban pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas, las cuales estaban en trámite y no se tenía fecha exacta de la aplicación de la medida, por lo que los tiempos no daban para acceder a una terminación del proceso. Sin embargo, desde que la demanda fue admitida, las etapas procesales del trámite ejecutivo fueron agotadas, pues se cumplió con la notificación del demandado y la inscripción de las medidas cautelares. Además, los términos de la inactividad procesal que prevé la norma para terminar el proceso por desistimiento tácito no se habían cumplido.

1.3. En proveído de 21 de marzo de 2023, el juzgado de primer nivel resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo que mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada.

Las razones de lo resuelto se concretaron en que, por medio de la providencia de 28 de noviembre de 2022 se incorporó notificación al demandado que no cumplía con los requisitos establecidos normativamente, por ello, el despacho requirió al promotor de la demanda para que volviera a notificar debidamente al ejecutado, para lo cual otorgó un término de 30 días, so pena de desistimiento tácito, conforme con el artículo 317 del código general del proceso, empero, dicha carga procesal no fue acatada.

Adicionalmente, el despacho corroboró que no existía medidas cautelares pendientes de materializar, por cuanto mediante Oficio No. 773 de 24 de noviembre del 2022, la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Turbo

Antioquia comunicó la inscripción de la medida de embargo referente a los inmuebles con matrículas inmobiliarias No. 034-30035 y No. 034-17604. Finalmente, determinó que la parte demandante, como ya se dijo, no cumplió con la carga procesal, en el término otorgado.

### CONSIDERACIONES

2.1. El numeral 1 del artículo 317 del Código General del Proceso establece el desistimiento tácito como sanción a la inactividad de la parte. Al respecto, la norma en cita señala:

*"ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:*

*1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.*

*Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.*

*El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.*

*(...)".*

2.2. En relación con esta figura procesal, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC1150 de 2021 hizo varias precisiones frente al desistimiento tácito. En este sentido, indicó:

*Sobre el desistimiento tácito, esta Sala, en reciente decisión, dijo que los jueces «deben resolver las causas ágil y prontamente, de modo que si un litigante falta a las cargas y deberes que le impone el ordenamiento según la hipótesis correspondiente, dilatando, obstaculizando, impidiendo o siendo negligentes en el laborío procesal para la solución de asuntos, se impone al juez la obligación o el deber de decretar el desistimiento tácito según la hipótesis legal correspondiente» (CSJ STC4021-2020 y STC8091-2020).*

*De igual forma, en cuanto al desistimiento tácito se ha adoctrinado, reiteradamente, que*

*«... se halla en la legislación vigente dentro del capítulo consagrado para las formas de terminación anormal del procedimiento, y tiene lugar en virtud de la declaración del juzgador de conocimiento, cuando el promotor no cumple el requerimiento hecho para que efectúe una carga procesal necesaria para proseguir el trámite, o cuando la actuación permanece inactiva en la secretaría durante un plazo de un año en primera o única instancia.*

*«Se erige esta forma de extinción del proceso, notoriamente, en un mecanismo para evitar la duración indefinida de procedimientos estancados por la inactividad, desidia o abandono del sujeto que ha ejercitado su derecho de acción. Además, cuestiones relativas a la seguridad jurídica y a la armonía social, reclaman que las disputas procesales sean dirimidas en un tiempo prudencial o razonable, y cuando ello no es factible por el comportamiento procesal de los interesados, la alternativa que se presenta es la terminación del juicio por el camino del desistimiento tácito.*

*«(...) En esos términos, el texto [del artículo 317 del Código General del Proceso] claramente regula dos supuestos de desistimiento tácito,*

*concernientes, como ya se anticipó, el primero a la reticencia de la parte a cumplir el requerimiento judicial para cumplir el acto que impide la continuación del proceso, actuación o trámite; y el segundo a la sanción por la parálisis o inactividad prolongada (un año) de la actuación judicial.*

*«En el primero, que es el que acá atañe, el juzgador en acatamiento de sus deberes como director del proceso, particularmente el del numeral 1º del artículo 42 del Código General del Proceso, adopta como medida el requerimiento a la parte para que realice una actuación de su exclusivo resorte, y sin la cual, la tramitación permanece paralizada. Y para que la exhortación no quede ahí, sino que se traduzca en un acto que verdaderamente agilice el litigio, el legislador contempló como sanción a la desatención de la orden judicial el desistimiento tácito, que decretado por primera vez impide que se presente nuevamente la demanda en los seis meses siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia, y hace inoperantes los efectos de interrupción de la caducidad y de la prescripción que se hubieran surtido con el libelo...» (CSJ AC594-2019, 25 feb, reiterado AC1290-2020, 6 de jul. Rad. 2018-02708).*

*Pese a que la quejosa realizó actuaciones que el a quo constitucional consideró que interrumpieron el término del artículo 317 del C.G.P., la Sala no comparte esta premisa, por cuanto el cumplimiento del requerimiento no puede darse a medias o de manera inconclusa, de lo contrario entorpecería la finalidad que encierra la figura del desistimiento tácito.*

*Al respecto, esta Corte ha dicho:*

*«Pero también fue descartada la interrupción del término dispuesto para el cumplimiento de la carga procesal incumplida, que llevó al desistimiento tácito, porque si el requerimiento que hace el juez para que se ejecute la carga pendiente, según el numeral 1º del susodicho artículo 317 del CGP, pudiera interrumpirse con 'cualquier actuación', como se anotó, tal mecanismo de dirección y ordenación procesal carecería de*

*sentido, pues con una actividad indeterminada o carente de idoneidad se burlaría fácilmente el propósito legislativo de lograr la marcha organizada del trámite judicial. De ahí que la actuación de la parte requerida en esa particular hipótesis normativa, tiene que ser idónea para el impulso del asunto» (CSJ. AC8174-2017, reiterado en STC4021-2020).*

#### CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si la juez de primer grado tuvo razón al decretar la terminación del proceso ejecutivo por desistimiento tácito, porque la parte ejecutante no cumplió con la carga procesal que le incumbía pese a que, so pena de que se aplicara la sanción del artículo 317 del C.G.P. fue requerida de manera previa para que procediera de la forma que se le indicó.

Al respecto, esta dependencia judicial encuentra que lo definido por la autoridad de primera instancia se ajusta a derecho, debido a que en el expediente se constata que, en proveído de 14 de septiembre de 2022 se libró mandamiento de pago en favor de Glanderson Asprilla Rentería, providencia en que se ordenó la notificación personal del demandado. Posteriormente, en auto de 28 de noviembre de 2022, se requirió al extremo procesal activo, so pena de decretar la terminación por desistimiento tácito, con el fin de que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la decisión, efectuara las diligencias tendientes a notificar en debida forma a la parte ejecutada. Sin embargo, dicho término transcurrió sin que mediara pronunciamiento de la parte interesada, así que la célula judicial que la requirió, ante el incumplimiento de la carga procesal impuesta, decretó en auto de 3 de febrero de 2023 la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Ahora, los argumentos expuestos por la parte recurrente, no tienen vocación de prosperidad debido a que, de manera objetiva se constata que los actos de gestión llevados a cabo por el accionante, tendientes a lograr la notificación personal mediante correo electrónico del demandado no se surtieron en debida forma, en tanto no reunían los requisitos de ley, al haberle informado de manera errada al ejecutado la fecha desde la cual se consideraba notificado y la fecha desde la cual comenzaría a correr el traslado de la demanda, y

tampoco lo previno sobre el término con el que contaba para pagar o proponer excepciones; todo lo cual dio lugar a que se requiriera al interesado para que rehiciera la actuación en debida forma, empero, el interesado no lo hizo en el término de 30 días que de acuerdo con la ley se le concedió. Luego, el juzgado no hizo más que proceder de acuerdo con la actuación a que daba lugar la omisión descrita. Por otra parte, se debe advertir que tampoco asiste razón al impugnante al esgrimir que existía medidas cautelares pendientes de perfeccionarse, en vista de que, desde 24 de noviembre de 2022 mediante Oficio 773, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo Antioquia comunicó la inscripción de la medida de embargo referente a los inmuebles con matrículas inmobiliarias 034-30035 y 034-17604.

En conclusión, al estar inscritas las medidas cautelares y no haberse acatado el requerimiento del despacho de primer nivel, el auto recurrido debe ser confirmado.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 3 de febrero de 2023, por el Juzgado 012 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas por cuanto no se causaron.

NOTIFÍQUESE

  
MARTHA CECILIA LEMA VILLADA  
Magistrada